

Alegó, previo anuncio y relación pública, la abogada doña Carla Bruna por el recurso. Santiago, 10 de octubre de 2023. Alejandra Soto Nilo, relatora.

Santiago, diez de octubre de dos mil veintitrés.

Al escrito folio N°15: Téngase presente y a sus antecedentes.

Vistos:

En la sentencia se introduce la siguiente modificación.

Se suprime su motivo vigésimo segundo.

Y se tiene además presente:

Que de los hechos asentados en autos surge, de manera inconcusa, que el actor ha padecido dolor, sufrimiento y angustia producto de las torturas y apremios ilegítimos de los cuales fue objeto, así como por la forma en que estos se produjeron, lo que por sí solo constituye un daño moral que debe indemnizarse por el Fisco de Chile, cuyo monto debe fijarse prudencialmente, atendido la realidad del caso en particular, así como los montos que, en casos similares, se han otorgado, para así tender a un trato igualitario entre las víctimas que recurren ante los órganos jurisdiccionales y a los baremos obtenidos del estudio de la jurisprudencia existente sobre la materia.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, **se confirma** la sentencia apelada dictada el veinticuatro de abril de dos mil veinte, por el 19° Juzgado Civil de Santiago, **con declaración** que se reduce el monto de la indemnización por concepto de daño moral que debe pagar el demandado al demandante a la suma de \$50.000.000.- (cincuenta millones de pesos).

Se previene que la ministra Vásquez, si bien concurre a la confirmatoria del fallo en alzada, estuvo por rebajar ostensiblemente la indemnización regulada.

Para ello tiene en consideración, en primer lugar, que el único lapso de tiempo que se puede indemnizar a título de daño moral al actor, son los días que permaneció detenido por agentes del Estado, y siendo víctima de apremios y torturas; mas, no se puede incluir el periodo que estuvo en la cárcel pública a disposición de una Fiscalía Militar, como tampoco el lapso de relegación impuesto, puesto que el perjuicio derivado de aquello, sea por una injusta o infundada detención, un sobreseimiento posterior o por una condena arbitraria, corresponde sea conocido por la Excma. Corte Suprema, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 N° 7 letra i) de la Constitución Política.

Por otra parte, la previniente comparte el rechazo de la excepción de pago o reparación integral, puesto que no ha existido una obligación previamente establecida que pueda estimarse satisfecha. No obstante ello, consta del proceso

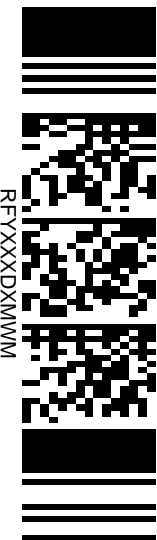


que la víctima de autos ha percibido beneficios reparatorios que superan los 26 millones de pesos y sigue percibiendo una pensión mensual, los que si bien no excluyen la indemnización que ahora se pide, tal valor debe tenerse en consideración al momento de regular el quantum de la indemnización que aquí se cobra, desde que tanto aquellos beneficios como el daño moral que ahora se regula tienen el mismo origen, cual es el menoscabo producido por la ilegal detención cometida por agentes del Estado.

En tales condiciones, la previniente estuvo por rebajar la indemnización por el daño moral sufrido por el actor a la suma de cinco millones de pesos.

Regístrese y devuélvase.

N° 10311-2020 Civil.



Pronunciado por la Decimotercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Carolina Soledad Vasquez A., Ministro Suplente Rene Cerda E. y Fiscal Judicial Ana Maria Del Pilar Quintero H. Santiago, diez de octubre de dos mil veintitrés.

En Santiago, a diez de octubre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

